

tiembre 26 de 1874.—*Francisco Medina*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 5 de 1874.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Sinaloa por D. Othon Wegelin, contra el cobro que hace el administrador de la aduana terrestre de Mazatlan, de la cantidad de 181 pesos 37 centavos por derechos de consumo de efectos extranjeros, con arreglo al decreto del Estado fecha 23 de Mayo de 1872. Visto el informe de la autoridad responsable del acto reclamado; el pedimento del ciudadano promotor fiscal; la sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente. Y

Considerando: que conforme á la fraccion 1ª del art. 112 de la Constitucion federal, los Estados no pueden, sin consentimiento del Congreso de la Union, imponer contribuciones ó derechos sobre importaciones y exportaciones.

Considerando: que no puede entenderse concedido á los Estados ese permiso por la ley de 31 de Mayo de 1872, que derogó los arts. 19 y 83 del arancel vigente, pues la expresada ley tuvo por objeto exclusivo dejar subsistente el derecho de consumo en el Distrito federal y territorio de la Baja California.

Considerando: que el derecho de consumo cuyo pago se exige á Wegelin, es en realidad un impuesto sobre importacion de efectos extranjeros. Por estas consideraciones y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion general, se decreta:

Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada en 21 de Setiembre último por el Juez 2º suplente de Distrito de Sinaloa, que declaró, que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Othon Wegelin, contra los actos de que se queja.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 17 de Diciembre de 1875.—*Enrique Lanta*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Federico Cassina, en representación de D. Eduardo Gutierrez, contra los procedimientos del recaudador de impuestos del Estado, que para hacer efectivo el pago de las contribuciones causadas por los bienes del concurso de acreedores de la Sra. Dª Merced Herrera de Lamadrid, ha embargado algunos terrenos de la Hacienda del "Jacal Grande."

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que segun la liquidacion que obra en este expediente, Dª Merced Herrera de Lamadrid, debe al Estado por contribucion desde 15 de Mayo de 1867, hasta 15 de Junio de 1874,..... \$ 916 98 cs.; y desde esta fecha hasta el último de Setiembre, \$ 361 4 cs. En 15 de Ju-

no referido, se publicó una ley conforme á la que, en los remates públicos, se admiten posturas con el diez por ciento de menos, sobre las dos terceras partes del valor de las fincas embargadas. Esta deducción se verifica en cada almoneda, de modo que despues de cierto tiempo, los bienes secuestrados acaban por venderse en vil precio.

Bajo esta base se ha anunciado la venta de unos terrenos de la hacienda del «Jacal» pertenecientes al concurso de la expresada Sra., del que es acreedor D. Eduardo Gutierrez García, quien interesado en el asunto, ha pedido amparo contra el remate que por menos de las dos terceras partes del valor de dichos terrenos, iba á verificar la recaudacion de contribuciones directas.

Es inconcuso que siendo absolutas las leyes positivas, tienen sus límites de lugar y tiempo. La nacionalidad y el territorio, fijan los primeros. El cambio total ó parcial de legislación, determinan los segundos. Esta distincion no es arbitraria y se encuentra en la doctrinas de los jurisconsultos relativas á los límites locales y temporales de las reglas de derecho.

Las reglas de derecho, dice Savigny, están llamadas á regir las relaciones del derecho; ¿mas cuáles son los límites de su imperio? del sentido de esta cuestion, se encuentra precisado por la naturaleza del derecho positivo, que no siendo uno mismo para la humanidad, varía con los pueblos y los Estados, en el seno de cada cual es obra de las ideas generales y de ciertas fuerzas especiales. Esta diversidad de derechos positivos, hace necesario é importante el deslinde de su estension, para decidir las colisiones que entre ellos se susciten.»

«Hasta aquí, continua el mismo autor, hemos considerado las reglas de derecho como fijas, sin contar con las modificaciones que el tiempo les hace sufrir. El derecho positivo jamas permanece estacionario y ofrece una sucesion continua de consecuencias en su desarrollo orgánico; de modo que está en su esencia variar con el transcurso del

tiempo. Todo juicio sobre un derecho actual, reconoce por base hechos jurídicos que pertenecen al pasado. Como en el intervalo que media del pasado al presente, puede haber cambiado el derecho positivo, es indispensable determinar la época en que debe aplicarse la ley que decida un caso dado.»

Tenemos por lo mismo una nueva especie de límites del imperio de las reglas de derecho, y otra de las colisiones posibles no menos importantes y difíciles que las relativas á la extension territorial de las leyes. Bajo un punto de vista, estas nos parecen fijas, simultáneas é inmóviles; bajo el otro, sucesivas y variadas por su movimiento continuo y progresivo (Savigny Der. Rom. lib. 3º, cap. 1º núm. 344.)

Siendo el Estado de Querétaro libre y soberano en lo tocante á su régimen interior, (art. 40 y 41 de la Constitución) parece que una cuestion sobre contribuciones de su Erario, debiera decidirse por solo sus autoridades.

Segun los autores que se ocupan del conflicto de las leyes, el primer principio general en esta materia, resulta inmediatamente del hecho de la independencia de los Estados, de los que cada uno posee y ejerce solo y exclusivamente la soberanía y jurisdiccion en la plena extension de su territorio. De este principio se sigue, que las leyes de cada Estado afectan, obligan y rigen con pleno derecho, todas las propiedades muebles é inmuebles que se encuentran en su territorio, así como las personas que lo habitan, hayan ó no nacido en él; y por último, que estas leyes afectan y rigen del mismo modo todos los contratos y hechos consentidos ó perpetrados dentro del mismo territorio. (Story Coments. sobre el conflicto de las leyes § 18 de Félix en el Derecho Internacional privado § 9 y Walter lib. 1º § 245.)

Sin embargo, se exceptúa de este principio fundamental, el conflicto que se verifica entre una ley suprema y otra subordinada, como sucede al presente en que la Constitución prohíbe se dé efecto retroacti-

vo á las leyes, y en que una autoridad del Estado de Querétaro pretende hacer ejecutivos, derechos fiscales con arreglo á las leyes posteriores al acto de deberlos, pues en este caso tiene que prevalecer la ley suprema (art. 126 de la Constitución.)

Si en ejercicio de su soberanía las autoridades del Estado aplican é interpretan sus propias leyes, no así el pacto fundamental, cuya última inteligencia está reservada á los tribunales de la Union, á quienes corresponde conocer de todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento de las leyes que, como la Constitución, son federales (frac. 1ª del art. 97 de la Constitución.)

Después de haber enseñado Story, que en muchos casos las decisiones de la autoridad ejecutora ó legislativa, son definitivas y concluyentes, no siendo susceptibles de revision, continúa: «que cuando la cuestion es de una naturaleza diferente, susceptible de exámen y decision judicial, admite otro procedimiento. La interpretacion favorable ó no á la legalidad del acto, dada por el Estado, la autoridad nacional, la Legislatura ó el poder Ejecutivo, puede en esta circunstancia, segun su naturaleza, ser comparada con la Constitución misma y sometida á una revision judicial. Nosotros pensamos que, es para tales casos, que la Constitución ha designado el árbitro comun y definitivo, á cuyas decisiones todos los otros poderes están subordinados, y que este arbitrio es la suprema autoridad judicial de los tribunales de la Union» (Story Coment. Abrev. sobre la Constitución, núms. 208 y 209.)

Como la queja de D. Eduardo García se haya presentado en la vía y forma de amparo por violacion de garantías individuales, asume el carácter de cuestion judicial en los términos especificados en los arts. 101, 102 de la Constitución y ley reglamentaria de 20 de Enero de 1869.

Para fijar el límite temporal de las leyes, se toma ordinariamente por base un principio que se dá por absoluto, y que sin pre-

sentarse por los autores bajo el mismo aspecto, puede aplicarse en las siguientes proposiciones: 1ª: las leyes nuevas no tienen efecto retroactivo; 2ª: las leyes nuevas no deben lastimar los derechos adquiridos. Sin entrar en consideraciones sobre la segunda premisa, basta por ahora limitarse al exámen de la 1ª, para entender cuál es el verdadero sentido de la retroactividad que rechaza. Evidentemente no debe tomarse en su sentido literal, para no caer en el absurdo de juzgar un hecho pasado como si realmente no hubiera acaecido; pues siendo esto imposible, estaria por demas una regla de derecho para impedirlo. El efecto retroactivo debe entenderse moralmente, y entonces significa que una ley retroactiva atraeria bajo su dominio los resultados de hechos jurídicos anteriores, influyendo sobre ellos. Este efecto retroactivo sobre actos anteriores, es susceptible de distintos grados. Primeramente puede recaer sobre las consecuencias de actos jurídicos anticipados á la nueva ley. En segundo lugar, y es lo que sucede en el caso que dá motivo á este juicio, puede ademas abrazar el tiempo transcurrido entre los hechos jurídicos y la ley nueva.

Dos ejemplos pondrán en evidencia estos diversos grados de retroactividad.

Si en un país donde la usura es permitida, se hace un préstamo con el 10 por ciento de rédito, y si tres años después se declara vigente el Código de Justiniano que limita los réditos al 6 por ciento: el primer grado de retroactividad produciria el efecto de que el 4 por ciento excedente al interes legal, no podria ser reclamado después de la publicacion de la nueva ley, y que este mismo 4 por ciento vencido durante los tres años anteriores á la ley, seria del acreedor, quien podria reclamarlo en justicia. El segundo grado de retroactividad, daria por resultado, que el 4 por ciento excedente al interes legal, no podia ser exigido ni en los tres años vencidos, ni después.

Si en un Estado en que la enagena-

ción de la propiedad puede verificarse por simple contrato, se vende una casa de campo, y cinco años después una ley nueva exige la tradición como circunstancia indispensable para la validez de las enagenaciones: el primer grado de retroactividad, produciría el efecto de que se considerase como propietario al comprador, durante los cinco años anteriores á la ley, é hiciere suyos los frutos percibidos; y que una vez promulgada esta, dejará de ser dueño. Si se aplicase al segundo grado de retroactividad, vendría á resultar: que el comprador jamás fué propietario y que percibió indebidamente los frutos.

La fórmula expresada rehuía absolutamente toda acción á la ley sobre las consecuencias de los actos anteriores á su promulgación, y en todos los grados imaginables. Así es que en los ejemplos supuestos, ella mantiene los intereses estipulados al 10 por ciento en el pasado y en el porvenir, y reconoce la propiedad adquirida por simple contrato, no solo en los cinco años anteriores á la nueva ley, sino indefinidamente. (Savigny Der. Rom. lib. 3, cap. 2º núm. 385.)

El principio de la no retroactividad en la aplicación de la ley, se encuentra reconocido como antiguo é incontestable en las leyes romanas, desde el tiempo de Cicerón, cuando este dice, que ninguna ley surte su efecto por lo pasado. *Neque in ulla lege præteritum tempus reprehenditur*..... (Cicerón Orat. 1. in Verrem núm. 42) Se repite en diversas disposiciones del Código de Justiniano y especialmente en la ley 7ª Cód. de leg., cuyo autor no le propone como nuevo, sino como preciso resultado de la naturaleza y fin de la legislación, y como una regla dada á los jueces contra todo error posible en materia de interpretación. «*Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta præterita revocari.*» De aquí pasó á las decretales de Gregorio IX y á los antiguos códigos españoles (cap. 13. X de constit. L. 1ª tit. 1º

TOMO VII.—PARTE II.

1º lib. 2 del Fuero Juzgo, 1ª tit. 5, lib. 4. del Fuero Real; 200, del Estilo; 15. tit. 14. Part. 3 y 13, tit. 17, lib. 10 N. R.)

No es por lo mismo extraño verlo consignado en las principales legislaciones modernas. La introducción del código prusiano, se expresa en estos términos: «Las leyes nuevas no pueden aplicarse á los actos ni á los hechos anteriores á su promulgación.» (Párr. 14.) El Código Napoleón dice: «Art. 2º La ley no dispone sino del porvenir, ella no tiene efecto retroactivo.» En la legislación Austriaca el mismo principio está desarrollado con estas expresiones. «Las leyes no tienen efecto retroactivo; así es que no ejercen influencia alguna sobre los actos anteriores á su promulgación, ni sobre los derechos adquiridos.» (Savigny Der. Rom. lib. 3º cap. 2º núm. 387.)

En la Constitución Americana se lee: «ninguna proyecto de ley para condenar sin forma de juicio, será aprobado, ni aceptada ninguna ley retroactiva.»

Siendo la ley una regla que se establece para dirigir nuestras acciones, y no teniendo fuerza obligatoria, sino desde su promulgación, es consiguiente, como se ha visto, que no pueda aplicarse á los actos pasados, sino sólo á los venideros. Por esto se dice que la ley mira solo al porvenir y que carece de efecto retroactivo. Esta es, como se ha visto, una máxima consagrada en todos los Códigos como principio de moral legislativa, pues sin ella desaparecerían la seguridad, la propiedad y la libertad: garantías primordiales del individuo, para cuya protección se ha establecido el poder público. Siguiéndola el art. 14 de la Constitución federal, dispone: «que no se expida ninguna ley retroactiva, y que nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él.

Contra este precepto constitucional, peca la resolución administrativa que se reclama.

Por lo que el promotor fiscal pide, se conceda el amparo solicitado.

28.

Querétaro, 20 de Octubre de 1874.—
Luis Castañeda.

Es copia. Querétaro, Octubre 30 de 1874.
—*Francisco Ruiz*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Querétaro, Octubre 24 de 1874.

Visto el presente recurso de amparo promovido por el C. Federico Cassina, en nombre y representación del C. Eduardo Gutiérrez, acreedor hipotecario del concurso á bienes de la Sra. D^a Merced Herrera de Lamadrid contra el Recaudador de contribuciones del Estado, que aplica el tít. 17 del Código de Procedimientos civiles al adeudo que dicho concurso de la Sra. Lamadrid, tiene por contribuciones causadas en épocas anteriores á la promulgación de dicho Código, juzgando el quejoso con dicho acto, violadas en su persona las garantías que la Constitución general otorga al hombre en sus arts. 14 y 16, al darle efecto retroactivo á las disposiciones del Código citado, y molestarlo por la oficina recaudadora, autoridad no competente tratándose de un concurso necesario, en que solo el juez de él es el competente para resolver las cuestiones que acerca de los bienes concursados ocurran.

Vistos los informes de la autoridad ejecutora del acto reclamado; la prueba rendida y los respectivos alegatos, así como lo mas que de autos consta y verse debió.

Resultando de las constancias de autos: Primero: que la ley que declaró vigente en el Estado el Código de procedimientos civiles del Distrito federal, fué promulgada el 15 de Junio del corriente año, (fojas 9.)

Segundo: que de la liquidación practicada por la oficina de contribuciones, (fojas 34.) aparece que la Sra. Lamadrid adeuda novecientos cuarenta y seis pesos noventa y ocho centavos, (\$ 946. 98 cs.) de los impuestos y contribuciones que las fincas de su propiedad causaron con anterioridad al 15 de Junio del corriente año, y trescientos sesenta

y un pesos cuatro centavos (\$ 361. 04 cs.) causados con posterioridad á dicha fecha, (fojas 35.)

Tercero: que igualmente está comprobado, por confesión de la autoridad ejecutora del acto reclamado, en sus informes, (fojas 16 y 23) que las disposiciones del tít. 17 del Código, las aplicó al monto total del adeudo, no creyendo vulnerar la garantía del art. 14 de la Constitución, por haber hecho esa aplicación no solo á los adeudos anteriores á la vigencia de él, sino así mismo á los posteriores, y ser conforme á la equidad, á la justicia y conveniencia de los intereses fiscales, proceder á una sola ejecución para verificar el cobro de un adeudo causado en dos tiempos próximos, y muy especialmente cuando ese procedimiento no lastimaba los intereses de los particulares.

Considerando: que el art. 14 de la Constitución general, dice textualmente: «No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley;» de lo que se deduce, que la retroactividad de una ley ó de su ejecución, consiste en aplicarla á lo pasado con perjuicio de derechos adquiridos; que la ley no puede referirse á hechos anteriores á su promulgación, y consiguientemente la autoridad que debe aplicarla, no puede hacerlo á aquellos. Que la misma Constitución en la fracción 2^a del art. 31, al prevenir que sea obligación de todo mexicano, contribuir á los gastos públicos así de la federación como del Estado y municipio en que resida, dice expresamente «de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes;» lo que demuestra claramente, que es indispensable para exigir la obligación allí prescrita, á todo ciudadano, el que existan esas leyes que fijarán los impuestos y manera de cobrarlos, los cuales no pueden referirse por lo mismo al pasado.

Considerando: que las leyes fiscales vi-

gentes antes de la promulgacion del Código, imponian á los causantes meros penas distintas y menores. Que el aplicarse las impuestas por éste á adeudos anteriores á su vigencia, es hacerlo obrar con relacion al tiempo pasado, atacando derechos adquiridos, sin que tenga fuerza la razon alegada por el ciudadano recaudador, de tratarse de adeudos próximos y ser mas conveniente, justo y equitativo para el fisco, aplicar una sola ley, pues antes que los intereses fiscales debe atenderse á los derechos del hombre, base y objeto de nuestras instituciones.

Considerando lo que aunque en derecho la retroactividad no tiene lugar en los procedimientos, este principio no puede tener aplicacion en el presente caso, tanto por no tratarse de procedimientos judiciales, cuanto porque las deducciones ó rebajas que establece el Código en los remates de las fincas embargadas, afecta la esencia del derecho adquirido por el causante, de imponerse de las penas que otra ley señalaba distintas á las que el Código prescribe.

Considerando por último, respecto á las razones en que se hace consistir la violacion del art. 16 de la Constitucion: que la competencia para conocer del adeudo de contribuciones que tienen los bienes de la Sra. Herrera de Lamadrid, hoy sujetos á un concurso necesario, está definida en las leyes del fuero comun y fiscales del Estado, por lo cual ella tiene que ser resuelta con arreglo á ellas, sin que por juzgarse competente la oficina recaudadora, viole la garantía del art. 16.

Por las razones y fundamentos legales expuestos, de conformidad con lo pedido por el C. Promotor fiscal y con apoyo de los arts. 101 y 102 de la Constitucion, debia fallarse y se falla: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Eduardo Gutierrez, representado por el C. Federico Cassina, contra el acto del ciudadano recaudador de contribuciones del Estado, que aplica las disposiciones del tit. 17 del Cód-

igo de procedimientos civiles, á lo que adeudan al fisco por contribuciones causadas con anterioridad á la promulgacion de dicho Código, los bienes de la Sra. Mercedes Herrera de Lamadrid.

Notifíquese, y previa la reposicion del papel simple invertido, por el del sello respectivo y de la compulsa de las copias del presente fallo, elévense estas actuaciones á la Suprema Corte para los efectos legales.

Así en definitiva lo decretó el C. Juez de Distrito en el Estado y firmó. Doy fé. — *V. de la Peña.*—*Francisco Ruiz*, secretario.

Es copia. Querétaro, Setiembre 6 de 1874.—*Francisco Ruiz*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 7 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por el C. Federico Cassina, en representacion de D. Eduardo Gutierrez, contra los procedimientos del recaudador de impuestos del Estado, que para hacer efectivo el pago de las contribuciones causadas por los bienes del concurso de acreedores de la Sra. D^a Mercedes Herrera de Lamadrid, sin ser autoridad competente en el caso, y dando efecto retroactivo á las disposiciones del tit. 17 del Código de procedimientos civiles, ha embargado algunos terrenos de la Hacienda del «Jacal Grande» sobre la cual tiene el quejoso constituida hipoteca especial á su favor, designándose como garantías violadas las que consignan los arts. 16 y 27 de la Constitucion federal.

Visto el informe de la autoridad; lo alegado por las partes; el fallo del inferior con cuanto mas se tuvo presente y ver convino. Por sus propios legales fundamentos se confirma la sentencia dictada por el Juez de Distrito con fecha 24 de Octubre último, en la que declaró: «que la Justicia de la

"Unión ampara y protege al C. Eduardo Gutierrez, representado por el C. Federico Cassina, contra el acto del ciudadano recaudador de contribuciones del Estado, que aplica las disposiciones del Código de procedimientos civiles, á lo que aducen al fisco por contribuciones causadas con anterioridad á la promulgacion de dicho Código, los bienes de la Sra. Mercedes Herrera de Lamadrid."

Devuélvanse los actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, 15 de Enero de 1875.—*Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO.

Promovido por el C. Lic. Pedro J. Morales, en representacion de D. Luis Zepeda, ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, contra los procedimientos del Juez 3º de letras de la 1ª fraccion judicial del Estado, en virtud de los que, lo mandó poner detenido con guardia en el Hospital civil de Monterey.

PEDIMENTO FISCAL.

C. Juez 2º suplente de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que este juicio de amparo promovido por el apoderado del Sr. D. Luis Zepeda, quejándose, primero, de que se violaba en la persona de su poderdante, por el juez 3º de letras de la primera fraccion judicial del Estado, con una orden que expidió este funcionario para que el Sr. Zepeda fuera conducido al hospital civil, con el fin de examinar el estado de sus facultades mentales, la garantía otorgada en el art. 16 de la Constitucion política de la República, por carcer de fundamento legal dicha orden, y haciéndose extensiva despues la queja, á que con los procedimientos ulteriores de aquel funcionario, se han violado tambien en perjuicio del mismo Sr. Zepeda las garantías que se consignan en los arts. 8, 11, 14, 19 y 20 de la misma Constitucion de la República. Se ha mandado que conforme á la ley de la materia, permanezca este juicio á disposicion de las partes en la secretaría del juzgado, á fin de que puedan sacar los apuntes que les convenga, para formular sus respectivos alegatos, una vez cerrado ya el término probatorio en él concedido. En esta virtud, pasa el que suscribe á esponer por vía de alegato, lo muy poco que cree conveniente añadir á su anterior pedimento.

Durante el término de prueba, el quejoso justificó, entre otros hechos, los de que su poderdante es vecino de la ciudad del Saltillo y que allá las autoridades judicia-